



# Asamblea General

Distr. general  
15 de diciembre de 2022

Original: español

---

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 92º período de sesiones, 15 a 19 de noviembre de 2021

#### Opinión núm. 58/2021, relativa a José Santos Sánchez Rodríguez (Nicaragua)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo<sup>1</sup>, el Grupo de Trabajo transmitió el 14 de mayo de 2021 al Gobierno de Nicaragua una comunicación relativa a José Santos Sánchez Rodríguez. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

---

<sup>1</sup> [A/HRC/36/38](#).



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### Información recibida

#### *Comunicación de la fuente*

4. José Santos Sánchez Rodríguez es ciudadano de Nicaragua, mayor de edad, de profesión electricista y pintor, con dirección de residencia habitual en Masaya.

5. La fuente indica que el Sr. Sánchez Rodríguez participó activamente en las protestas y barricadas de 2018 en Nicaragua, habiendo sufrido una primera detención supuestamente arbitraria, entre febrero y junio de 2019, y siendo liberado en virtud de la Ley de Amnistía de junio de 2019. Posteriormente reanudó el activismo, la recaudación de fondos y la distribución de alimentos para las víctimas de la represión en las protestas, así como sus denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que provocó que las autoridades y los paramilitares lo acosaran.

#### a) Detención

6. Según la información recibida, el Sr. Sánchez Rodríguez habría sido privado de su libertad en la madrugada del 12 de noviembre de 2019, en su vivienda familiar en el barrio Monimbó. Una docena de agentes antimotines, armados y encapuchados, rompieron las puertas de su casa, alrededor de las 4.30 horas, y allanaron violentamente el lugar, sin presentar orden de allanamiento ni de captura.

7. Los oficiales se dirigieron directamente al Sr. Sánchez Rodríguez, lo llevaron al único cuarto de la casa, y lo retuvieron e intimidaron por más de media hora. La fuente alega que durante ese tiempo los oficiales implantaron drogas en el cuarto con el fin de acusarlo del delito de tráfico de estupefacientes. Mientras tanto apuntaban con sus armas a los otros residentes y familiares, incluido un menor de edad. La fuente señala que la policía no informó ni explicó a los familiares lo que sucedía. El jefe del operativo (el único oficial con el rostro descubierto) habría obligado a uno de los familiares a firmar un papel sin dejarle leer el contenido del documento.

8. Los policías se llevaron al Sr. Sánchez Rodríguez sin informar a nadie a dónde ni por qué razón lo arrestaban, negándose comunicación oficial sobre su paradero. Habría sido trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (“El Chipote”), en Managua, donde supuestamente permaneció detenido y torturado hasta ser llevado ante un juez el 16 de noviembre de 2019.

9. Según la fuente, el acta de detención indica que el Sr. Sánchez Rodríguez fue detenido *in fraganti* el 13 de noviembre de 2019 —un día después de la fecha alegada—, a las 12.20 horas, por delitos de crimen organizado y tráfico ilegal de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias. El acta de resultado de allanamiento de urgencia y el recibo de ocupación, hechos el 13 de noviembre, estipulan que se encontró una bolsa en el suelo, al lado de la cama, que contenía 1.117,7 g de cocaína, 465,4 g de marihuana y dos teléfonos celulares. Estos documentos no fueron firmados por el detenido, pero la solicitud de convalidación de actos de investigación, fechada el 13 de noviembre, señala que las pruebas encontradas vinculan al Sr. Sánchez Rodríguez con una supuesta agrupación de crimen organizado que se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Según la fuente, no hubo comunicación oficial a los familiares o los abogados de los cargos que se le imputaban al Sr. Sánchez Rodríguez.

10. La fuente indica que, desde el inicio del proceso judicial en su contra, el Sr. Sánchez Rodríguez guarda prisión en el centro penitenciario Jorge Navarro (“La Modelo”). Desde el 30 de septiembre de 2020 está en una celda de castigo llamada “el infiernillo”, en el pabellón de máxima seguridad (“La 300”).

11. Según la fuente, el 18 de noviembre 2019, el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de la Policía Nacional brindó una conferencia de prensa donde presentó al Sr. Sánchez Rodríguez y los otros coacusados, todos vestidos con el uniforme azul característico de los prisioneros, como miembros de una “agrupación delincuencia terrorista”, que supuestamente cometieron atentados en los departamentos de Chinandega y León con explosivos industriales y armas de fuego. El segundo jefe afirmó que los coacusados habrían intentado detonar un puente y tratado de derribar una torre de transmisión eléctrica y presentó supuestas evidencias en la conferencia de prensa.

b) Proceso judicial

12. La fuente alega que los derechos y las garantías constitucionales del Sr. Sánchez Rodríguez fueron sistemáticamente violados en todas las etapas del proceso, el cual estuvo marcado por las irregularidades y una parcialidad manifiesta pues el Sr. Sánchez Rodríguez fue presentado al juez después de las 48 horas requeridas por el derecho internacional. Cuando la defensa planteó esta cuestión durante la audiencia preliminar, el Juez la descartó diciendo que no era responsabilidad del Poder Judicial.

13. El caso fue trasladado sin justificación al Juzgado Quinto del Distrito de lo Penal de Audiencia de la circunscripción de Managua a pesar de que el delito, el arresto y el proceso judicial inicial tuvieron lugar en Masaya. El traslado a la jurisdicción de la capital suele reservarse para los casos de relevancia nacional, lo que no aplica a este caso, pero es un patrón característico en casos de detención y enjuiciamiento de personas percibidas como opositoras al régimen.

14. En la audiencia preliminar, el 16 de noviembre de 2019, la autoridad judicial decretó prisión preventiva y pasó el caso a “tramitación compleja”, que permite hasta un año de detención preventiva. Al presentar los cargos ante el Juez en la audiencia preliminar, la acusación solo mencionó el delito de tráfico ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. El Ministerio Público acusó al Sr. Sánchez Rodríguez de ser parte de una presunta red de narcotráfico. Los otros integrantes serían conocidos activistas que participaron enérgicamente en las protestas de 2018 y en posteriores manifestaciones de disidencia pacífica.

15. Las autoridades judiciales admitieron la prueba fiscal a pesar de que fue presentada fuera del plazo legal de 48 horas. Mediante una convalidación de pruebas, validaron aquellas supuestamente reunidas contra el Sr. Sánchez Rodríguez y sus coacusados, no obstante la violación del debido proceso durante el arresto. Esta convalidación *a posteriori* solo se permite en circunstancias excepcionales “graves y urgentes” por lo que el caso fue declarado de “tramitación compleja”, clasificación normalmente reservada para cargos relativos al terrorismo o al crimen organizado internacional.

16. Entre noviembre de 2019 y julio de 2020, la defensa presentó al menos seis solicitudes de evaluación médica urgente, que fueron desechadas por las autoridades correspondientes. No obstante las evidentes lesiones y preocupante deterioro del estado de salud del Sr. Sánchez Rodríguez, nunca se le ha concedido una atención médica adecuada desde su detención, y la autoridad judicial ha rechazado todas las solicitudes de medidas alternativas a la prisión preventiva.

17. El juicio oral y público, inicialmente previsto para finales de marzo de 2020, fue aplazado al 12 de mayo de 2020, porque uno de los acusados había sido trasladado con síntomas graves de enfermedad por coronavirus (COVID-19). En la audiencia, programada para el 5 de junio de 2020, la defensa del Sr. Sánchez Rodríguez pidió una nueva reprogramación por motivos de salud. A pesar de presentar los certificados con la debida justificación, la Jueza del Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal decretó el abandono, dando a los procesados menos de una semana para presentar un nuevo abogado privado o de lo contrario asignaría defensa pública. La práctica de acosar a los abogados defensores de presos políticos, incluso de decretar el abandono, está denunciada como una forma de represalia y una táctica del Poder Judicial para que estas personas sean representadas por defensores públicos, lo que logra esconder las irregularidades de los procesos. En el caso del Sr. Sánchez Rodríguez, el 16 de junio de 2020, se nombró a una nueva abogada defensora.

18. El juicio del Sr. Sánchez Rodríguez, y de los otros coacusados, tuvo lugar entre el 1 de junio y el 13 de julio de 2020, ante el Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Audiencia de la circunscripción de Managua. Durante el juicio, la Jueza descartó los testigos y pruebas de la defensa, y no admitió el testimonio del asesor legal del Sr. Sánchez Rodríguez. Además, el interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos del Ministerio Público pusieron de manifiesto las contradicciones y la falta de fundamentos jurídicos del caso, así como la parcialidad de la Jueza, que parecía hacer objeciones y argumentar el caso junto con el Ministerio Público.

19. La fuente alega que la acusación y la sentencia se basaron en el testimonio de “Código Uno”, un policía encapuchado que supuestamente participó en el seguimiento, observación, verificación y documentación del caso, y de las presuntas actividades ilícitas. Pero, durante el interrogatorio, Código Uno no pudo aportar ningún elemento de prueba de las supuestas actividades investigadas. El testimonio de Código Uno sobre el allanamiento y la captura del Sr. Sánchez Rodríguez repite el libelo de acusación. Declaró explícitamente que no supervisaba ni fue testigo personalmente de ninguna de esas supuestas actividades y que había sido informado por “colaboradores secretos”. Cuando la defensa pidió más detalles sobre estos colaboradores secretos, Código Uno no pudo responder y la Jueza intervino ordenando al testigo que no respondiera. Cuando se le presionó para que diera más detalles, el testigo no pudo proporcionar ninguno, tampoco información básica como el número de personas que vivían con el acusado y su trabajo regular. Código Uno no respondió a ninguna de las preguntas de la defensa durante el contrainterrogatorio.

20. La fuente alega que los otros testimonios presentados contra el Sr. Sánchez Rodríguez respecto a presuntas actividades ilícitas carecían de fundamento. El capitán y el detective encargados del caso no pudieron probar que las drogas supuestamente encontradas en la casa del Sr. Sánchez Rodríguez le perteneciesen a él. El supervisor del acto de la inspección ocular reconoció no haber estado presente en el allanamiento por lo que no presencié el descubrimiento y prueba de las drogas. La perita química que realizó las pruebas de los productos encontrados confirmó que las sustancias eran cocaína y marihuana, pero no pudo vincular al acusado con el tráfico ilícito de ellas.

21. Se reporta que, el 31 de julio de 2020, el Sr. Sánchez Rodríguez fue condenado a 15 años de prisión y 1000 días multa (62.390,00 córdobas), de conformidad con el artículo 359 del Código Penal. La pena máxima para el delito de tráfico de drogas es de 15 años y 800 días multa. La sentencia se emitió a pesar de las contradicciones entre los testigos, la insuficiencia e incorporación ilícita de pruebas y un descarte de las pruebas de la defensa que planteaban una duda razonable. El día de la sentencia, la Jueza presentó agravantes para los tres acusados, sin fundamento legal y sin notificar a la defensa para que esta se preparara. Esta sentencia fue apelada el 16 de agosto de 2020, pero aún no ha sido resuelta.

c) Condiciones de detención

22. La fuente alega que, desde su captura el 12 de noviembre de 2019, el Sr. Sánchez Rodríguez ha sido detenido bajo condiciones crueles e inhumanas. A pesar de sufrir problemas graves de salud, producto de las torturas sufridas durante su primera detención, y agravadas por las torturas y malos tratos recibidos desde su arresto en noviembre de 2019, le han negado sistemáticamente atención médica urgente.

23. Se señala que las celdas están hacinadas, suelen tener más de 20 personas a pesar de que su capacidad es para ocho y solo cuentan con un hoyo que sirve de inodoro y de espacio de aseo personal. Reciben comida dañada con excrementos de ratas o cucarachas. Además, se indica que el Sr. Sánchez Rodríguez recibe intimidaciones y amenazas constantes, por parte de los custodios del lugar de detención, incluso amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia.

24. En la audiencia preliminar, el 16 de noviembre de 2019, el Sr. Sánchez Rodríguez reportó que sufría de dolores de cabeza extremadamente severos y constantes, pérdida de visión, dolores en el pecho que dificultaban su respiración, hinchazón en las sienes y pérdida de equilibrio y de conciencia. En vista del deterioro de su salud, a petición del abogado

defensor, la autoridad judicial ordenó a La Modelo y al Instituto de Medicina Legal que realizaran una valoración médica del detenido.

25. El 16 de diciembre de 2019, durante la audiencia inicial, la defensa informó que las autoridades del centro penitenciario habían hecho caso omiso de tal orden. El Juez envió una segunda orden a las autoridades para que el Sr. Sánchez Rodríguez fuese evaluado urgentemente. El 27 de enero de 2020, la defensa informó que las autoridades del sistema penitenciario nuevamente ignoraron la orden judicial, negándose a brindar atención médica al detenido. Por ello, la autoridad judicial emitió oficio por el que se ordenaba al Director del centro penitenciario que permitiese que el Sr. Sánchez Rodríguez fuese valorado por un médico. El 29 de enero de 2020, la representación legal del Sr. Sánchez Rodríguez presentó una carta dirigida a la Ministra de Gobernación de Nicaragua, quien dirige y supervisa las acciones de los funcionarios del sistema penitenciario, mediante la que se informaba de esta situación. El Ministerio no ha respondido.

26. El 12 de febrero de 2020, abogados del Sr. Sánchez Rodríguez enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud urgente de medidas cautelares en su favor que incluyeran: alternativas a la prisión preventiva; garantías al derecho a la salud y la protección de la integridad física y psíquica; su traslado a una institución de salud correspondiente para la debida atención; una investigación sobre los actos de desacato a la autoridad cometidos por el jefe del centro penal, y el acceso a la atención médica.

27. A pesar de las solicitudes de la defensa y de al menos tres órdenes judiciales para que se le concediera atención médica, las autoridades penitenciarias ignoraron sistemáticamente su obligación de trasladar al Sr. Sánchez Rodríguez para que fuese examinado, poniendo su salud y vida en grave riesgo.

28. El 30 de septiembre de 2020, el Sr. Sánchez Rodríguez y al menos otros dos presos de La Modelo se cosieron la boca como forma de protesta. Iniciaron una huelga de hambre junto con otros 50 presos de La Modelo y del centro penitenciario de Matagalpa, mediante la que denunciaban los malos tratos recibidos en la cárcel y exigían su liberación. Como represalia, fue trasladado al pabellón “La 300” (ala de máxima seguridad) en una de las celdas de castigo, conocidas como “el infiernillo” donde permanece detenido en condiciones particularmente inhumanas, sometido a torturas tanto físicas como psicológicas.

29. La fuente afirma que el 15 de octubre de 2020 un representante de la Cruz Roja acudió a la cárcel, entrevistó al Sr. Sánchez Rodríguez y le preguntó si estaba en huelga de hambre y si se había zurcido la boca. La fuente señala que el Sr. Sánchez Rodríguez tuvo que mentir diciendo que no porque antes de la visita funcionarios del penal amenazaron con matarlo y sembrarle droga a los familiares si decía algo sobre la huelga de hambre y el zurcido de los labios. Posteriormente, ese mismo día, el Sr. Sánchez Rodríguez habría sido golpeado violentamente hasta perder conciencia por funcionarios del penal. No le dieron atención médica.

30. Desde el 15 de octubre de 2020, las autoridades de La Modelo empezaron a coaccionar a los familiares de los presos políticos a fin de que firmasen un documento en el que se expresaba que su pariente preso estaba en “perfectas condiciones de salud tanto física como psicológicamente”. De rehusarse a hacerlo, se les ha amenazado con la suspensión de visitas y entrega de paquetería (alimentos y medicamentos).

31. El 20 de octubre de 2020, después de que el Presidente de la República negara las denuncias de malos tratos y torturas contra personas privadas de libertad y declarara que las puertas del centro penitenciario estaban siempre abiertas a los familiares de los detenidos, invitándolos a visitarlos para demostrar que esas denuncias eran mentira, abogados defensores y familiares se dirigieron al centro penitenciario para solicitar una visita con el fin de verificar las condiciones de detención, la situación de la salud y la integridad física del Sr. Sánchez Rodríguez, de conformidad con los artículos 47 y 75 de la Ley núm. 473. Sin embargo, las autoridades penitenciarias y el Ministerio de Gobernación se negaron a atenderlos. Al día siguiente, cuando volvieron a presentarse a La Modelo, no pudieron ni siquiera acercarse a las instalaciones ya que fueron rodeados por guardias y civiles que los intimidaban, tomando fotos y anotando las placas de los autos, obligándolos a abandonar la zona. La fuente señala que, desde 2017, el Gobierno no ha permitido el acceso a centros de detención a las organizaciones de derechos humanos.

32. Según la fuente, el Gobierno ha respondido a la crisis sanitaria de COVID-19 con mayores restricciones del espacio cívico y con la persecución de personas, incluidos los profesionales de la salud, que han difundido información sobre la situación. En el caso de los presos políticos, se ha denunciado la falta de medidas de prevención adecuadas en los centros penitenciarios, entre ellas las pésimas condiciones de detención, el hacinamiento y la negación sistemática de atención médica. En mayo de 2020, el Gobierno habría otorgado la liberación en virtud del beneficio de convivencia familiar a 4.515 reclusos para reducir el hacinamiento, pero nunca señalaron que fuera por razones ligadas a la propagación del virus en los centros de detención. Sin embargo, ningún preso político registrado por las organizaciones de derechos humanos fue excarcelado en virtud de esta medida, a pesar de que varios de ellos estaban particularmente vulnerables, como el Sr. Sánchez Rodríguez.

d) Información de contexto y antecedentes

33. Según la fuente, el Sr. Sánchez Rodríguez participó en las protestas en Nicaragua a partir de abril de 2018 y era activo en el levantamiento de las barricadas en su barrio. En ese contexto, la Policía Nacional y el equipo de inteligencia policial, apoyado por las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, realizaron labores de inteligencia para detectar y localizar a las personas que participaron en los diferentes bloqueos de carreteras. Desde entonces, para huir de la persecución, el Sr. Sánchez Rodríguez tuvo que esconderse y miembros de su familia sufrieron acciones de intimidación, incluida una menor de edad.

34. El 18 de febrero de 2019, cuando el Sr. Sánchez Rodríguez se encontraba en una finca de un familiar, un grupo de más de 70 policías nacionales y paramilitares, fuertemente armados, en 14 camionetas, allanaron la propiedad, apuntando con armas y amenazando a todos los presentes en la finca, incluyendo a niños y mujeres. El Sr. Sánchez Rodríguez y cuatro de sus familiares, incluido un joven de 16 años, fueron arrastrados detrás de la casa, forzados al piso, esposados y golpeados. Al Sr. Sánchez Rodríguez le dislocaron el hombro izquierdo, le llenaron con tierra la boca, los oídos y la nariz, y un oficial le rompió las costillas mientras las oficiales mujeres lo golpeaban con fusiles en los brazos, las piernas y los pies.

35. Al amanecer, fue arrastrado a una zona de la propiedad por diez policías armados y obligado a cavar una zanja donde le dijeron que lo iban a sepultar. Un oficial cargó y apuntó un arma al pecho del Sr. Sánchez Rodríguez y apretó el gatillo, que se atascó. Luego, le amarraron un mecate en la pierna derecha, lo esposaron de pies y manos y lo arrastraron por un terreno vacío. Siguió torturándolo, golpeándolo repetidamente en la cabeza con un arma, mientras lo interrogaban sobre quién lo financiaba a él y a sus actividades. Más tarde lo llevaron a un laboratorio donde continuaron interrogándolo y golpeándolo, incluso cuando ya no podía estar de pie. Luego se lo llevaron a El Chipote, donde tuvieron que arrastrarlo a una celda porque ya no podía caminar más. No le dieron atención médica.

36. El Sr. Sánchez Rodríguez fue detenido en El Chipote entre el 18 de febrero y el 1 de mayo de 2019, sin ningún cargo o proceso judicial formal. El 1 de mayo de 2019 fue acusado de delito de terrorismo y encarcelado en La Modelo, donde fue puesto en una celda de castigo bajo constante intimidación y amenazas por los custodios. Nunca recibió atención médica. El Sr. Sánchez Rodríguez no fue llevado a su audiencia el 23 de mayo de 2019 y fue liberado en virtud de la Ley de Amnistía, el 10 de junio de 2019, sin ninguna explicación.

37. La fuente indica que el trauma físico y psicológico sufrido por el Sr. Sánchez Rodríguez a consecuencia de su primera detención es grave y duradero. Tanto por el grado de brutalidad ejercido como por la falta de atención médica durante varios meses, en una situación inhumana e insalubre. Los efectos son dolores crónicos y debilitantes, náuseas constantes, pérdida de visión, dificultad para respirar e hinchazón en las sienes. Un chequeo médico reveló la rotura de varias costillas en el lado izquierdo, traumatismos en el cráneo, un disco de la columna desviado, problemas de visibilidad en el ojo izquierdo y la necesidad de una cirugía nasal.

38. Desde su liberación, en junio de 2019, el Sr. Sánchez Rodríguez habría denunciado las continuas amenazas y el hostigamiento de la Policía. Dos unidades estaban siempre apostadas en su casa. Oficiales de policía y civiles lo filmaban, lo fotografiaban y lo amenazaban a él y a su familia, obligándolo a permanecer encarcelado *de facto* en su domicilio en un constante estado de angustia y miedo. Fue despedido de su trabajo como

electricista de un hospital y se le borraron sus registros académicos y el diploma profesional, como represalia por participar en las protestas. Después de su liberación en virtud de la Ley de Amnistía, el Sr. Sánchez Rodríguez continuó participando en las protestas pacíficas y denunciando repetidamente la intimidación policial y paramilitar hasta dos días antes de su arresto.

39. El 5 de septiembre de 2019, el Sr. Sánchez Rodríguez habría denunciado públicamente, ante una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos, las torturas y otras violaciones de derechos humanos que sufrió durante su primera detención, mencionando los nombres de algunos de los responsables.

40. El 22 de septiembre de 2019, alrededor de las 10.30 horas, policías antimotines encapuchados y civiles entraron por la fuerza en la casa del Sr. Sánchez Rodríguez, sin orden judicial. Un oficial se lo llevó en una camioneta blanca y se dirigió hacia Managua. En la camioneta, los oficiales lo acusaron de fabricar bombas y le preguntaron dónde las había puesto y dónde escondía las armas. Lo amenazaron con llevarlo a El Chipote para torturarlo como lo hicieron durante su primera detención. El Sr. Sánchez Rodríguez negó cualquier implicación en la supuesta fabricación de bombas.

41. Durante esta detención, el Sr. Sánchez Rodríguez no fue llevado a una delegación policial o a El Chipote, sino que lo condujeron por Managua y luego lo llevaron al cráter del volcán Masaya, donde siguieron interrogándolo durante una hora y media, preguntándole dónde estaban las bombas y quién le pagaba, amenazándolo con arrojarlo al cráter del volcán si seguía realizando denuncias públicas. Lo soltaron esa noche, volviendo a amenazarlo por si presentaba una queja sobre este incidente ante una organización de derechos humanos o los medios de comunicación, advirtiéndole que dejara de involucrarse en la oposición cívica, pues ya le habían visto participar en tales actividades. Sin embargo, el Sr. Sánchez Rodríguez denunció estos hechos a una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos y expuso el incidente durante una conferencia de prensa.

42. Unos días antes de la detención por la cual se encuentra actualmente privado de libertad, el Sr. Sánchez Rodríguez participó en un evento organizado en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, en apoyo a los presos aún encarcelados y en solidaridad con los familiares y víctimas de la represión. El 14 de noviembre de 2019, esa iglesia fue blanco de graves ataques por parte de turbas progubernamentales. En este contexto, otro grupo de activistas que intentaban llevar agua e insumos médicos a las personas encerradas fueron detenidos arbitrariamente y acusados de tráfico de armas y otros delitos graves.

43. La detención del Sr. Sánchez Rodríguez se dio en un contexto de persecución en contra de personas percibidas como opositoras y de excarcelados. En los días previos a su detención, varios expresos denunciaron un incremento de intimidaciones y detenciones en las que agentes de policía los amenazaban específicamente con “ponerles drogas” para volver a detenerlos, si no cesaban de manifestarse contra el Gobierno.

e) Argumentos de detención arbitraria

44. La fuente alega que la detención del Sr. Sánchez Rodríguez es arbitraria con arreglo a las categorías I, II, III y V del Grupo de Trabajo. Se señala que la detención, la condena y la tortura contra el Sr. Sánchez Rodríguez se llevaron a cabo debido a sus opiniones políticas y a las actividades cívicas que realiza, así como en represalia por haber revelado públicamente detalles de sus dos detenciones anteriores, incluidos los nombres de oficiales implicados en su tortura.

45. El arresto, la detención y el proceso judicial del Sr. Sánchez Rodríguez serían ilustrativos de la persecución perpetrada contra personas que han participado en marchas y expresado su oposición al Gobierno. Su caso revela una forma de represión y criminalización dirigida específicamente a ex presos políticos que ya habían sido detenidos en algún momento, entre abril de 2018 y junio de 2019, y quienes se beneficiaron de la Ley de Amnistía.

46. Luego de su liberación en junio de 2019, el Sr. Sánchez Rodríguez fue víctima de un constante acoso y amenazas por parte de la Policía y grupos progubernamentales, al punto de no poder salir de casa por temor a su vida y seguridad. A pesar de las amenazas, siguió siendo

un crítico declarado del Gobierno y continuó denunciando los abusos y violaciones cometidos contra él y su familia, así como en contra de otros disidentes. Siguió participando activamente en expresiones de resistencia pacífica, como reuniones con otros ex presos opositores, actos de solidaridad con las víctimas y “piquetes exprés”, una de las únicas formas de protesta disponibles, ya que las marchas pacíficas están prácticamente prohibidas desde septiembre de 2018.

47. En septiembre de 2019, dos meses antes de su captura, el Sr. Sánchez Rodríguez presentó una denuncia ante una organización de derechos humanos en la que dio detalles sobre su detención inicial, en febrero de 2018, las torturas y los malos tratos que sufrió durante el arresto y a lo largo de la privación de su libertad, así como el continuo acoso policial desde su liberación. Dos semanas más tarde, fue detenido y amenazado por agentes de policía, que le advirtieron contra cualquier otra participación en protestas cívicas o divulgación de lo sucedido. A pesar de las amenazas, el Sr. Sánchez Rodríguez denunció públicamente el incidente y presentó una segunda denuncia. Hasta el día de su tercera detención, el Sr. Sánchez Rodríguez continuó informando sobre el acoso y las amenazas que recibió de la policía y los paramilitares.

48. Para la fuente es evidente que el Sr. Sánchez Rodríguez fue perseguido y detenido arbitrariamente por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión, así como a la libertad de reunión pacífica y asociación garantizados en los artículos 12, 13, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 del Pacto.

49. La fuente alega que, durante la detención del 12 de noviembre de 2019, se violaron el artículo 33 de la Constitución y los artículos 3, 7, 8, 9 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 14 y 17 del Pacto.

50. El artículo 95 del Código Procesal Penal establece que los detenidos podrán comunicarse con sus familiares en las tres horas siguientes a su detención y deberán ser informados sobre las causas de ella. El artículo 256 garantiza la presentación ante el juez dentro de las 48 horas de la detención. En el caso del Sr. Sánchez Rodríguez, tras el arresto en su casa el 12 de noviembre de 2019, fue llevado a El Chipote sin que los familiares ni los abogados fueran formalmente notificados. Fue cuatro días después, en la audiencia preliminar del 16 de noviembre de 2019, cuando el Sr. Sánchez Rodríguez fue presentado ante un juez y formalmente acusado de un delito de tráfico de estupefacientes, junto con otras tres personas, todas reconocidas como opositoras al Gobierno.

51. Se alega que en el proceso se han dado claras violaciones de los derechos constitucionales y de las garantías del debido proceso, el derecho a un proceso imparcial e independiente, a las garantías necesarias para la defensa y el principio de presunción de inocencia, en violación de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10 y 14 del Pacto.

52. El derecho a la presunción de inocencia del Sr. Sánchez Rodríguez fue violado cuando fue presentado en una rueda de prensa organizada por la Policía, el 18 de noviembre de 2019, vestido con un uniforme azul y descrito como integrante de un grupo terrorista dedicado a la fabricación y colocación de artefactos explosivos. Estas alegaciones nunca se incluyeron en el juicio en su contra o de sus coacusados.

53. La autoridad judicial demostró serias violaciones de su deber de imparcialidad y objetividad. El allanamiento, la ocupación de objetos y la detención se hicieron sin presentar las debidas órdenes, lo que debería hacer inadmisibles las pruebas y las evidencias recogidas durante el arresto por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, se otorgó una convalidación *a posteriori* de los actos investigativos, argumentando que fueron desarrollados con carácter de urgencia.

54. El proceso se llevó en Managua a pesar de que los hechos imputados y el arresto tuvieron lugar en la ciudad de Masaya. Esto sería una sustracción del juez natural, en violación del artículo 34, párrafo 2, de la Constitución y del artículo 22, párrafo 1, del Código Procesal Penal. Asimismo, el juicio fue declarado de tramitación compleja, lo cual duplica los tiempos procesales y permite hasta un año de prisión preventiva. La tramitación compleja es reservada para casos de terrorismo o crimen organizado. Además, el juicio oral y público



se desarrolló con irregularidades procesales, ante las constantes intervenciones e influencias indebidas de la autoridad judicial en la etapa del interrogatorio y contrainterrogatorio, llegando la Jueza a atribuirse funciones propias del ente acusador, que en este caso era el fiscal auxiliar del Ministerio Público.

55. El Ministerio Público, pese a las serias contradicciones entre los testigos de cargo, con insuficiencia de pruebas e ilegalidad en la incorporación de estas en el juicio y faltando al principio de objetividad, solicitó un fallo condenatorio con petición de pena máxima, sin existir la fundamentación de ley ni las circunstancias que justificaran tal petición.

56. La Jueza, careciendo de elementos jurídicos suficientes, sin la debida fundamentación y con evidente prueba de descargo que planteaba duda razonable a favor del Sr. Sánchez Rodríguez, emitió un fallo condenatorio injusto, desapegado de la ley, e impuso la pena máxima por el delito, lo que viola las normas procesales relativas a la fundamentación de la sentencia.

57. La fuente alega que las condiciones de detención son violatorias de varias obligaciones que tiene Nicaragua en materia de derechos humanos, incluidas aquellas contempladas en los artículos 3, 5 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9 y 10 del Pacto, sintetizadas en el principio 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que establece que ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, se indica que su traslado a una celda de castigo en el pabellón de máxima seguridad fue arbitrario y una represalia por su participación en la huelga de hambre iniciada por varios presos para denunciar los abusos y violaciones de derechos humanos en su contra y en contra de sus familiares.

#### *Respuesta del Gobierno*

58. El Grupo de Trabajo transmitió los alegatos de la fuente al Gobierno el 14 de mayo de 2021, solicitándole que, antes del «duedate», proporcionara información detallada sobre el caso del Sr. Sánchez Rodríguez en la que se clarificasen las bases jurídicas y fácticas que justifican la detención, así como la compatibilidad de esta con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado.

59. El Grupo de Trabajo también solicitó al Gobierno que garantizase la integridad física y psicológica del Sr. Sánchez Rodríguez. Teniendo en cuenta el contexto de pandemia mundial, y de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud del 15 de marzo de 2020, relativas a la respuesta a la COVID-19 en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno a que diese prioridad al uso de medidas alternativas no privativas de la libertad en todas las etapas del proceso penal, esto es, durante la fase previa al juicio, durante el juicio, la etapa de decisión y la ejecución de la sentencia.

60. El Grupo de Trabajo lamenta que no se haya dado respuesta a su solicitud de información, de conformidad con los párrafos 15 y 16 de sus métodos de trabajo.

#### **Deliberaciones**

61. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

62. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones<sup>2</sup>. En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

63. El Grupo de Trabajo recuerda que incluso si la detención se ajustare a la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales, su mandato es determinar si esta es compatible con las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos. Por

<sup>2</sup> [A/HRC/19/57](#), párr. 68.

ello, es necesario evaluar los procedimientos judiciales y la propia ley, para determinar si cumplen con las normas que protegen el derecho a la libertad personal.

### *Categoría I*

64. La fuente alega que la detención del Sr. Sánchez Rodríguez es arbitraria con arreglo a la categoría I. Se informa que, al allanar el domicilio del Sr. Sánchez Rodríguez, los agentes de policía no mostraron orden de arresto, ni justificaron las razones de la detención y, además, apuntaron al resto de la familia con armas. El Sr. Sánchez Rodríguez no fue informado de los motivos de su detención, de las vías judiciales para impugnar la ilegalidad de la privación de su libertad ni de su derecho a contar con un abogado de su elección. Este modo de actuar de las autoridades nicaragüenses supone una violación del artículo 9, párrafo 2, del Pacto, de los principios 7 y 9 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal. Asimismo, se argumenta que contraviene la propia Constitución de Nicaragua que, en su artículo 33, párrafo 1, establece que, “[l]a detención solo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito del juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito”.

65. Preocupa al Grupo de Trabajo que el Sr. Sánchez Rodríguez haya estado desaparecido durante cuatro días, siendo una garantía el que toda persona arrestada por un cargo penal comparezca sin demora ante un juez, para ejercer su derecho a la defensa, dentro de un plazo no mayor de 48 horas<sup>3</sup>. Vale recordar que las desapariciones forzadas vulneran varias disposiciones sustantivas y de procedimiento del Pacto, y se considera que constituyen una forma particularmente grave de privación arbitraria de la libertad<sup>4</sup>. En virtud de ello, el Grupo de Trabajo decide remitir este caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

66. El Grupo de Trabajo recuerda que, de acuerdo con los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo y su ausencia constituye una violación de los derechos humanos<sup>5</sup>. El Estado debe garantizar el ejercicio efectivo de esta garantía fundamental de la libertad personal en todas las situaciones de privación de libertad, sin dilaciones ni excepciones<sup>6</sup>. Este derecho se aplica a todas las formas de privación de libertad, incluida la detención en virtud de medidas de lucha contra el terrorismo<sup>7</sup>. Estos derechos y garantías le han sido negados continuamente al Sr. Sánchez Rodríguez.

67. La fuente informa que, a pesar de que el acta de detención indica que el Sr. Sánchez Rodríguez fue detenido *in fraganti* el 13 de noviembre de 2019 a las 12.20 horas, un día después de la fecha alegada, por delitos de crimen organizado y tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el Gobierno no demostró que la flagrancia hubiera existido en esta detención. Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a que la flagrancia no debe presuponerse, sino que tiene que ser acreditada por la autoridad, nada de lo cual ha sucedido en el presente caso<sup>8</sup>.

68. El Grupo de Trabajo está convencido de que la detención preventiva del Sr. Sánchez Rodríguez, constituye una violación a la norma de derecho internacional que dispone que la detención debe de ser una medida cautelar de *ultima ratio*, lo que significa que debe ser la

<sup>3</sup> Véanse las opiniones núms. 6/2017, 30/2017, 49/2019, 60/2020 y 66/2020. Véase también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 33.

<sup>4</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 17.

<sup>5</sup> [A/HRC/30/37](#), párr. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, párr. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, anexo, párr. 47 a).

<sup>8</sup> Opinión núm. 9/2018, párr. 38. Véase asimismo Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Gutiérrez Soler vs. Colombia*, sentencia de 12 de septiembre de 2005, Serie C núm. 132; y *García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú*, sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C núm. 137.

excepción y no la regla<sup>9</sup>. En otras palabras, la prisión preventiva debe ser una excepción en interés de la justicia, debiéndose procurar la liberación cuando existan medidas que garanticen la presencia del acusado tanto en el juicio como en la ejecución de la sentencia.

69. La fuente indica que el Sr. Sánchez Rodríguez guarda prisión en el centro penitenciario Jorge Navarro (“La Modelo”), recluso en una celda de castigo llamada “el infiernillo”, en el pabellón de máxima seguridad (“La 300”), al que fue trasladado en represalia por haber realizado una huelga de hambre para pedir su liberación y denunciar los malos tratos que sufre dentro de la cárcel.

70. El Grupo de Trabajo sostiene que la fuente ha presentado un caso *prima facie* de que el Sr. Sánchez Rodríguez ha sido sometido a torturas y malos tratos. Esta conducta viola la prohibición absoluta de tortura como norma imperativa del derecho internacional, así como el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto, y los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Grupo de Trabajo decide referir este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

71. En el caso del Sr. Sánchez Rodríguez, las violaciones descritas de las garantías que protegen el derecho a la libertad personal llevan al Grupo de Trabajo a concluir que la detención es arbitraria por carecer de base legal, inscribiéndose en la categoría I.

### *Categoría II*

72. El Grupo de Trabajo destaca que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende el derecho a difundir información e ideas de toda índole, sea oralmente o por cualquier otra forma. Para el Grupo de Trabajo, la libertad de opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas<sup>10</sup>. Ambas libertades constituyen la base para el ejercicio efectivo de una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la participación política, protegido por los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 del Pacto<sup>11</sup>.

73. La libertad de expresión es de tal importancia que ningún Gobierno puede conculcar otros derechos humanos por las opiniones de carácter político, científico, histórico, moral, religioso o de cualquier otro tipo efectuadas o atribuidas a una persona. En consecuencia, no es compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto calificar como delito la expresión de una opinión, ni tampoco es permisible que una persona sea acosada, intimidada, estigmatizada, detenida ni sujeta a prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión debido a sus opiniones<sup>12</sup>.

74. El Grupo de Trabajo está convencido de que el Sr. Sánchez Rodríguez ha sido detenido y procesado después de una larga campaña de hostigamiento y persecución —no solo en su contra, sino también en contra de su familia— por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión, opinión, asociación y participación en la vida política de su país.

75. La detención del Sr. Sánchez Rodríguez se debe a su posición crítica al Gobierno desde abril de 2018 e identificada como tal por la Policía Nacional y el equipo de inteligencia policial, que ha realizado labores de inteligencia para detectar y localizar a las personas que mantienen tal posición. Desde entonces, el Sr. Sánchez Rodríguez ha tenido que huir de la persecución de estos funcionarios públicos y esconderse. También fue despedido de su trabajo y se borraron sus registros académicos y su diploma profesional como represalia por su participación en las protestas y su abierta posición política de oposición.

76. El Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Sánchez Rodríguez se debe a sus actividades en el ejercicio de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión, así como a la libertad de reunión pacífica y asociación, lo que contraviene lo

<sup>9</sup> A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58; opiniones núm. 5/2019, párr. 26; núm. 62/2019, párrs. 27 a 29; y A/HRC/37/6, párrs. 118.31 a 118.33.

<sup>10</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), párr. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, párr. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, párr. 9.

consagrado en los artículos 19 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto, por lo que es arbitraria conforme a la categoría II.

### *Categoría III*

77. A la luz de lo concluido de conformidad con la categoría II, el Grupo de Trabajo considera que no hay bases que justifiquen la detención y juicio del Sr. Sánchez Rodríguez. Sin embargo, en vista de las alegaciones de la fuente, el Grupo de Trabajo procederá a analizar si durante el curso de dicho procedimiento judicial se respetaron los elementos de un juicio justo, independiente e imparcial.

78. Como se señaló anteriormente, el Grupo de Trabajo está convencido de que durante la detención del Sr. Sánchez Rodríguez no se respetaron los derechos a ser informado de las causas de la detención y notificado sin demora de la orden de detención en su contra, a ser presentado inmediatamente ante un juez, a poder acceder a un tribunal para verificar la legalidad de su detención y a no ser sujeto a prisión preventiva, en contravención de lo dispuesto en el artículo 9 del Pacto.

### *Presunción de inocencia*

79. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11, párrafo 1, y el Pacto, en su artículo 14, párrafo 2, reconocen el derecho de toda persona acusada de un delito a que se presuma su inocencia. Ese derecho impone la obligación a cargo de todas las instituciones del Estado de tratar al acusado como inocente hasta que se haya dictado sentencia más allá de toda duda razonable.

80. Ese derecho obliga a todas las autoridades, incluidas las del Poder Ejecutivo, a no prejuzgar el resultado de un juicio, lo que implica abstenerse de hacer declaraciones públicas que afirmen la culpabilidad del acusado<sup>13</sup>. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “[e]l derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades, por lo cual estas deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada”<sup>14</sup>.

81. El Grupo de Trabajo ha determinado que las injerencias públicas que condenan abiertamente a los acusados antes de la sentencia vulneran la presunción de inocencia y constituyen una intrusión indebida que afecta a la independencia y la imparcialidad del tribunal<sup>15</sup>. En otras palabras, las declaraciones de funcionarios públicos violan el derecho a la presunción de inocencia al señalar al detenido como la persona responsable de un delito que aún no ha sido juzgado, haciendo creer al público en su responsabilidad e influyendo o prejuzgando la valoración de los hechos por la autoridad judicial competente<sup>16</sup>.

82. El Grupo de Trabajo recibió información convincente por la fuente, no refutada por el Gobierno, de que el 18 de noviembre de 2019, el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de la Policía Nacional presentó, en una conferencia de prensa, al Sr. Sánchez Rodríguez y los otros coacusados vestidos con el uniforme azul característico de

<sup>13</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 30; y *Kozulin c. Belarus* (CCPR/C/112/D/1773/2008), párr. 9.8.

<sup>14</sup> *Pollo Rivera y otros vs. Perú*, sentencia de 21 de octubre de 2016, Serie C núm. 319, párr. 177. Asimismo véanse *Tibi Vs. Ecuador*, sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C núm. 114, párr. 182; y *J. vs Perú*, sentencia de 20 de noviembre de 2014, Serie C núm. 275, párrs. 244 a 247. En términos similares, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Alenet de Ribemont v. France*, sentencia de 10 de febrero de 1995, párr. 41; *Daktaras v. Lithuania*, sentencia de 10 de octubre de 2000, párr. 42; *Petkov v. Bulgaria*, párr. 91; *Peša v. Croatia*, sentencia de 8 de abril de 2010, párr. 149; *Konstas v. Greece*, sentencia de 24 de mayo de 2011, párrs. 43 y 45; *Butkevicius v. Lithuania*, sentencia de 14 de junio de 2022, párr. 53; *Kuzmina and Others v. Russia*, sentencia de 20 de abril de 2021, párr. 96; e *Ismoilov and Others v. Russia*, sentencia de 24 de abril de 2008, párr. 161.

<sup>15</sup> Véanse las opiniones núms. 90/2017, 76/2018 y 89/2018.

<sup>16</sup> Véanse las opiniones núms. 6/2019 y 12/2019.

las prisiones en Nicaragua, afirmando que eran miembros de una “agrupación delincuencia terrorista” y que supuestamente cometieron atentados en los departamentos de Chinandega y León, con explosivos industriales y armas de fuego. El segundo jefe afirmó que los coacusados habrían intentado detonar un puente y habrían tratado de derribar una torre de transmisión eléctrica, en el municipio de La Paz Centro. En ese evento, la Policía presentó a otro grupo de 16 activistas detenidos en la iglesia de San Miguel Arcángel (Masaya) el 14 de noviembre de 2019<sup>17</sup>.

83. En virtud de la exposición del Sr. Sánchez Rodríguez ante los medios de comunicación ataviado con uniforme de recluso, las declaraciones de las autoridades policiales sobre la responsabilidad penal anticipada del Sr. Sánchez Rodríguez y la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, el Grupo de Trabajo considera que se violó el derecho a ser presumido y tratado como inocente, reconocido en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto.

#### Tribunal competente, imparcial e independiente

84. Según el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, toda persona tendrá derecho a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal en su contra. El Grupo de Trabajo considera que el requisito de imparcialidad exige que los jueces no deben permitir que su fallo se vea influido por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto bajo su consideración, ni comportarse de forma que promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. Asimismo, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable<sup>18</sup>.

85. En ese contexto, el Grupo de Trabajo, en su jurisprudencia reiterada ha considerado que el enjuiciamiento criminal de personas acusadas por delitos cometidos en un determinado territorio por parte de tribunales ubicados en otra jurisdicción constituye una violación del derecho a ser juzgado por el juez competente o natural, cuando la legislación nacional le atribuye expresamente la competencia a la jurisdicción de la localidad donde se cometió el supuesto delito<sup>19</sup>.

86. Por la información recibida, no disputada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo está convencido de que, conforme a la legislación nacional, la regla es que el tribunal competente para juzgar un delito es aquel en el que se cometió. Al respecto, el Grupo de Trabajo es consciente de que el 18 de noviembre se llevó a cabo la audiencia preliminar en el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencia de la circunscripción de Managua, donde el Sr. Sánchez Rodríguez fue acusado formalmente del delito de tráfico ilícito de armas, mientras que la detención por este delito sucedió en Masaya. La fuente insiste en que el traslado a la jurisdicción de la capital se reserva para casos de relevancia nacional, lo cual no aplica en este caso.

87. Además, el Grupo de Trabajo observa que el caso fue sometido a una tramitación compleja, proceso reservado para cargos relativos al terrorismo o al crimen organizado internacional, por la que se establece que se permita hasta un año de prisión preventiva. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo subraya que el tribunal que conoció del asunto contra el Sr. Sánchez Rodríguez no era el competente, lo que violó su derecho a ser juzgado por el juez natural, en contravención a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Los hechos presentados por la fuente, no rebatidos por el Gobierno, constituyen un ejemplo de la tendencia existente en la que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, los sospechosos han sido detenidos sin la protección del debido proceso. En vista de estas consideraciones, el Grupo de Trabajo decide remitir este caso a la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

<sup>17</sup> Opinión núm. 21/2020, párr. 28.

<sup>18</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 21.

<sup>19</sup> Opiniones núm. 28/2014, párr. 46; núm. 30/2014, párr. 51; núm. 1/2015, párrs. 31 y 34; núm. 6/2019, párr. 135; núm. 12/2019, párr. 121; y núm. 43/2019, párr. 77.

88. El Grupo de Trabajo ha manifestado que mantener a las personas en régimen de incomunicación viola su derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, de conformidad con el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto. La supervisión judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal y es esencial para garantizar que la detención tenga una base legal. Dado que el Sr. Sánchez Rodríguez no ha podido impugnar su detención ante un tribunal, se ha violado su derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 2, párrafo 3, del Pacto<sup>20</sup>.

89. El Grupo de Trabajo nota que la sentencia —por la que se condena al Sr. Sánchez Rodríguez a 15 años de prisión y 1.000 días multa— se emitió el 31 de julio de 2020, pese a las contradicciones entre los testigos, la insuficiencia e incorporación ilícita de pruebas, el descarte de las pruebas de la defensa que planteaban una duda razonable y la presentación por parte de la Jueza, el día mismo de la sentencia, de agravantes sin fundamentos legales para los tres acusados, sin haber notificado previamente a la defensa para que esta se preparara. Más aún, a pesar de que se presentó un recurso de apelación, se está todavía en espera de una decisión. Estas circunstancias llevan al Grupo de Trabajo a remitir este caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, para que tome las medidas correspondientes.

90. Por todo lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que en el caso del Sr. Sánchez Rodríguez se ha vulnerado de manera grave las garantías a un juicio justo previstas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como 9 y 14 del Pacto, lo que hace la detención arbitraria conforme a la categoría III.

#### *Categoría V*

91. Se ha convencido al Grupo de Trabajo de que el Sr. Sánchez Rodríguez es un activista social, defensor de los derechos humanos, lo que conllevó a su identificación como supuesto terrorista y opositor al régimen, posicionándolo en desventaja para ejercer sus derechos humanos referentes a una adecuada defensa y debido proceso.

92. El Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Sánchez Rodríguez se produce en un contexto de persecución y acoso en contra de personas que han sido identificadas como opositoras al régimen, quienes, de acuerdo con la fuente, han recibido amenazas policiales de “ponerles drogas” y volver a detenerlos para que cesaran en su activismo, lo que los coloca en una situación de discriminación por su posición política. Esta circunstancia ha sido observada por el Grupo de Trabajo, constatando que se ha violado la garantía establecida en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, y 26 del Pacto, por lo que la detención es arbitraria conforme a la categoría V.

#### *Consideraciones finales*

93. Según la información recibida, no refutada por el Gobierno, el Sr. Sánchez Rodríguez había sido detenido y torturado previamente en varias ocasiones. La anterior detención se produjo entre el 18 de febrero y el 1 de mayo de 2019, permaneciendo encarcelado sin ningún cargo mientras era torturado continuamente. En esa fecha, fue acusado de terrorismo y encarcelado en La Modelo, donde ocupó una celda de castigo, soportando una intimidación constante y amenazas por parte de los custodios. Nunca recibió atención médica. Fue liberado en virtud de la Ley de Amnistía el 10 de junio de 2019, sin ninguna explicación. La fuente indica que el trauma físico y psicológico del Sr. Sánchez Rodríguez es grave y duradero, tanto por el grado de brutalidad de los actos sufridos como por el hecho de que permaneciera en condiciones inhumanas e insalubres durante meses sin atención médica. Al ser liberado, sufría de dolores crónicos y debilitantes en la cabeza, náuseas constantes, pérdida de visión, dificultad para respirar e hinchazón en las sienes, varias costillas quebradas, traumatismos en el cráneo, un disco de la columna desviado, problemas de visibilidad en el ojo izquierdo y necesitaba una cirugía en la nariz. Vistas estas circunstancias, el Grupo de Trabajo decide remitir este caso a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

<sup>20</sup> Véanse las opiniones núms. 45/2017, 46/2017, 79/2017, 11/2018 y 35/2018.

94. Por las condiciones de detención y la falta de atención médica nunca concedida, a pesar de que entre noviembre de 2019 y julio de 2020 la defensa presentó al menos seis solicitudes de evaluación médica urgente, así como por las alegaciones de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Grupo de Trabajo, conforme al párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

95. El Grupo de Trabajo es consciente, asimismo, de que el Sr. Sánchez Rodríguez ha denunciado constantemente, ante diversas organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos, el continuo hostigamiento, amenazas y acoso de la Policía, soportando presencia de oficiales y policías que lo filmaban, fotografiaban y amenazaban a él y a su familia, obligándolo a permanecer encarcelado *de facto* en su propia casa y en un constante estado de angustia y miedo. Por ello, el Grupo de trabajo resuelve poner en conocimiento este caso a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

96. Finalmente, y con el objeto de poder entablar un diálogo directo y constructivo con las autoridades de los tres poderes del Estado, con representantes de la sociedad civil y con personas detenidas, con miras a lograr una mayor comprensión de la situación de privación de la libertad en el país, el Grupo de Trabajo sugiere que el Gobierno considere favorablemente permitirle llevar a cabo una visita al país. El Grupo de Trabajo desea recordar que desde el 26 de abril de 2006 Nicaragua extendió una invitación abierta a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y que la última vez que el Grupo de Trabajo visitó el país fue del 15 al 23 de mayo de 2006<sup>21</sup>.

### Decisión

97. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de José Santos Sánchez Rodríguez es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

98. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Sánchez Rodríguez sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

99. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Sánchez Rodríguez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

100. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Sánchez Rodríguez y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

101. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que tomen las medidas correspondientes.

102. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

<sup>21</sup>

Véase [A/HRC/4/40/Add.3](#).

**Procedimiento de seguimiento**

103. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Sánchez Rodríguez y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Sánchez Rodríguez;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Sánchez Rodríguez y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Nicaragua con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

104. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

105. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

106. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>22</sup>.

*[Aprobada el 16 de noviembre de 2021]*

---

<sup>22</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.